



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

///doba, 2 de diciembre de 2022.

### Y VISTOS:

Estos autos caratulados "**AZAR, MARTÍN Y OTROS S/ASOCIACIÓN ILÍCITA**" (EXPTE N° FCB 70549/2018/53/CA30)", venidos a conocimiento de la **Sala A** del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el abogado defensor de Agustina Cherro de Miguel, doctor Tristán Gavier; por el Ministerio Público de la Defensa en representación de Martín Azar; por los doctores Germán Gramática Bosch y Débora Ruth Ferrari, en carácter de abogados defensores de Gonzalo Gómez Pizzaro y por el doctor Benjamín Sonzini Astudillo, en representación de Dina Noemí Castillo, en contra de la resolución de fecha 7 de diciembre de 2021 dictada por el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, en cuanto dispuso: "**I. ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de Martín AZAR y de Agustina CHERRO DE MIGUEL**, ya filiados, en orden al hecho por el cual fueran indagados, calificado como lavado de activos de origen delictivo en calidad de co-autores (conf. art. 303 inc 1 del C.P -TEXTO SEGÚN LEY 26.683-, Y 45 del CP), de acuerdo a lo previsto en el art. 306 del C-P.P.N. **II.- ORDENAR el PROCESAMIENTO de Dina Noemí CASTILLO y Gonzalo GOMEZ PIZARRO**, ya filiados, en orden al hecho por el cual fueran indagados, calificado como lavado de activos de origen delictivo en calidad de PARTICIPES NECESARIOS (conf. art. 303 inc 1 del C.P -texto según ley 26.683-, y 45 del CP), de acuerdo a lo previsto en el art. 306 del C.P.P.N. **III. TRABAR EMBARGO** sobre los bienes propios de los inculpados **Martín Azar y Agustina Cherro de Miguel**, por la suma de diez millones de pesos (\$10.000.000) o en su defecto inhibirlos de la libre disposición de sus bienes por igual monto. **IV. TRABAR EMBARGO** sobre los

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36079524#348202601#20221202141134116



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

*bienes propios de los imputados **Dina Noemí CASTILLO y Gonzalo GOMEZ PIZZARO** hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos (\$5.000.000) o en su defecto inhibirlos de la libre disposición de sus bienes por igual monto".*

### Y CONSIDERANDO:

**I.-** Arriban las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos en autos, en contra de la resolución cuyo fragmento dispositivo luce transcripto precedentemente.

**II.-** Para así resolver, el Instructor sostuvo que el material probatorio obrante en autos permite tener por acreditado, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, la participación de los co-imputados Martín Azar, Agustina Cherro de Miguel, Dina Noemí Castillo y Gonzalo Gómez Pizarro en el delito de lavado de activos de origen ilícito, los dos últimos en calidad de partícipes necesarios.

Previo a adentrarse en el análisis de la prueba, destacó que la presente causa tiene su origen en la investigación llevada a cabo, a raíz de una denuncia, mediante la cual se logró determinar el lugar y las personas responsables del funcionamiento de una financiera en donde se habrían llevado a cabo complejas y sofisticadas maniobras financieras propias de una entidad bancaria en forma ilegal.

Señaló que aquellos créditos económicos que habrían obtenido los jefes y los integrantes de la asociación ilícita, se generaban y quedaban fuera del circuito económico legal, por lo que éstos habrían llevado a cabo una nueva operatoria a los efectos de disimularlos e introducirlos al circuito legal evitando llamar la atención





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

de los organismos de control fiscal y administrativo, a través del tipo penal del lavado de activos de origen delictivo.

Manifestó que la maniobra investigada en este caso, surgió a raíz de una conducta que habrían desplegado los imputados antes nombrados durante la instrucción de la causa principal, mientras ya se encontraban detenidos los jefes de la asociación ilícita.

Concluyó que esta operación de lavado debía efectuarse de manera distinta a las otras maniobras toda vez que esta requería de otra arquitectura y tecnicidad ya que Martín Azar se encontraba privado de su libertad y el dinero para "pagar impuestos" se encontraba en una cuenta en el extranjero que no estaba declarada.

Por ello, el encartado se habría valido, por un lado de su esposa, quien ya contaba con conocimientos previos sobre la materia, dado que habría intervenido en las operaciones de cable financiero ilegal y tenía contactos en el exterior a partir de sus vínculos familiares domiciliados en EEUU, y por otro, habría contado con la colaboración de los co-imputados Castillo y Gómez Pizarro. Estos últimos, habrían asesorado técnicamente y aportado la logística necesaria para llevar a cabo la maniobra, ya que era necesario ingresar legalmente esos fondos para poder aplicarlos al pago de tributos.

Para lograrlo, explica el Juez, era necesario la complicidad de algunos actores del sistema, toda vez que era inevitable la injerencia de los organismos de control estatal, Banco Central República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), ya que resultaría imposible respaldar de forma lógica la legalidad de los 26.300.000 pesos y su operatoria, teniendo en cuenta la

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36079524#348202601#20221202141134116



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

situación patrimonial declarada por Azar y Cherro ante el Fisco -monotributistas categorías "F" y "A"-.

Expresó que el material probatorio colectado en las presentes actuaciones, permite demostrar, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, las operaciones bancarias y bursátiles realizadas a nivel nacional e internacional para ingresar al país el rédito ilícito depositado en un cuenta offshore ubicada en una entidad bancaria de EEUU y sin declarar ante el Fisco Nacional por parte de uno de los jefes de la asociación ilícita investigada -Martín Azar- que en ese momento se encontraba privado de su libertad y de su esposa, Agustina Cherro de Miguel, que en esa instancia aún no se encontraba imputada en la presente causa, con la participación tanto de su Contadora, Dina Noemí Castillo, como del Presidente de la Sociedad de bolsa "Argentina Valores S.A", a saber, el Ingeniero Gonzalo Gómez Pizarro.

Agregó que esta operación para traer el dinero ilícito, habría sido realizada en etapas y se habría completado el día 22.6.2020 con una nueva transferencia desde la referida cuenta "offshore" de Agustina Cherro de Miguel, pero esta vez directamente a la cuenta de Argentina Valores S.A por la suma de U\$U 54.895, a los fines de efectuar la operación de dólar MEP y así hacerse con dinero en moneda nacional.

Por último, manifestó que el ingreso total de los fondos mal habidos desde el extranjero se habría completado con tres operaciones realizadas los días 22, 23 y 24 de junio del año 2020, en las cuales se habrían transferido cinco mil dólares (U\$U 5.000) desde la cuenta "offshore" de Cherro de Miguel en "Wells Fargo" hacia la cuenta de "Argentina Valores S.A" en el Banco BBVA Francés para ser

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36079524#348202601#20221202141134116



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

acreditados en la cuenta comitente de la nombrada en la misma entidad bancaria en moneda dólar para poder efectuar nuevamente las operaciones de Dólar MEP y así completar el círculo propuesto desde un inicio.

Al analizar la responsabilidad particular de cada uno de los imputados siguió los lineamientos trazados por el Fiscal en su dictamen de fecha 3.11.2021.

Señaló que la suma involucrada en la maniobra ilegal habría sido de un total de U\$U 300.000, monto que habría derivado directamente de las operaciones ilegales llevadas adelante por la financiera ilegal, toda vez, que a lo largo de las actuaciones se ha probado que las cuentas en el exterior que tenían sus miembros habrían sido utilizadas para cometer ilícitos, principalmente para las maniobras de "cable financiero", lo que les habría redituado elevados montos en moneda extranjera.

Dichas circunstancias se encuentran acreditadas a través de las comunicaciones telefónicas y los chats de los archivos obtenidos donde se detallan las transferencias bancarias realizadas y recibidas por elevados montos y las comisiones que cobraban por ello. Esta actividad de "cable financiero" habría sido digitada por Martín Azar y Diego Sánchez en su calidad de jefes y ejecutadas por el resto de los miembros de la asociación a su cargo.

Las operaciones legales seleccionadas para poder ingresar el rédito ilícito de manera legal habrían sido seleccionadas por la contadora, por un lado, la de "contado con liquidación" (CCL), por medio de la cual, se habría logrado ingresar al país doscientos diez mil dólares (U\$U 210.000) y por otro lado, operaciones de "dólar bolsa", por medio de las cuales, se habría introducido un monto cercano a cincuenta y cinco mil dólares (U\$U 55.000)

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36079524#348202601#20221202141134116



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

por un lado y quince mil dólares (U\$U 15.000) por el otro, separándolas por día en operaciones de cinco mil dólares cada una a efectos de sortear los límites de transferencias entre cuentas propias por parte de las entidades bancarias involucradas.

Para ello, Agustina Cherro de Miguel habría abierto la Cuenta Comitente en la Sociedad de Bolsa "Argentina Valores S.A".

Respecto a la participación necesaria de Dina Noemí Castillo, sostuvo el Juez que la imputación de la Fiscalía no es una interpretación confusa del significado del certificado de origen de fondos, como lo plantea la imputada, sino que del caudal probatorio surge que la encartada habría efectuado las siguientes conductas: 1) habría asesorado a los titulares de dichos fondos para llevar adelante las operaciones bursátiles con destino a "blanquear" fondos y regularizar la situación fiscal de Martín Azar; 2) se habría puesto en contacto con Gonzalo Gómez Pizarro, presidente de "Argentina Valores S.A" para que éste permitiera la apertura de cuenta comitente de Agustina Cherro de Miguel con el fin de realizar dichas operaciones bursátiles, 3) habría confeccionado, suscripto y acompañado el certificado de origen de fondos falso para salvar el "escollo" que significaban los organismos de control estatal para dicha operación; 4) habría tramitado ante el Organismo fiscal la regularización del contribuyente Martín Azar realizando presentaciones como autorizada, entre las que se encontraban: las DDJJ de impuestos a las ganancias desde el año 2014 en adelante y el pago de veintiséis millones trescientos mil pesos a tales fines.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

En cuanto a la posición exculpatoria asumida por la imputada Castillo, quien alegó desconocer la situación procesal que atravesaban sus clientes Martín Azar y Agustina Cherro de Miguel, sostuvo que no parecía sincera, en primer lugar por la notoriedad del caso en los medios de comunicación y en segundo lugar, por la noción precisa que habría tenido de las circunstancias que rodeaban el caso, teniendo en cuenta que se encontraba a cargo del asesoramiento contable de Martín Azar para regularizar su situación ante el Fisco.

Prueba de ello, es el acceso con la clave fiscal de Martín Azar en el sitio web de AFIP-DGI por parte de la Contadora, desde el domicilio de su estudio contable sito en Humberto Primo 630, piso 4, oficina 41, a través del IP n° 190.123.120.230 de su titularidad.

Por otra parte, la responsabilidad de Gonzalo Gómez Pizarro, en su doble carácter de Presidente y Oficial de Cumplimiento Titular ante la U.I.F. de la sociedad de bolsa "Argentina Valores S.A", estaría dada porque habría realizado las operaciones bursátiles y bancarias con las cuales se pudo introducir el dinero espurio traído desde una cuenta "offshore" sin declarar en los Estados Unidos a nuestro país, para aplicarlo a un intento de regularizar la situación fiscal de Martín Azar ante el Organismo fiscal nacional.

Sostuvo que Gonzalo Gómez Pizzaro, habría tenido desde el inicio (mes de marzo de 2020) pleno conocimiento de las circunstancias en las que se encontraban sus clientes Agustina Cherro de Miguel y su marido Martín Azar y a pesar de ello, no habría cumplido con las exigencias legales propias de su actividad bursátil, todo lo cual se habría concretado a través de los siguientes actos:

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36079524#348202601#20221202141134116





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

apertura de una cuenta comitente sin estar obligado a hacerlo, toda vez, que se podría haberse negado a hacerlo o una vez abierta la podría haber cerrado unilateralmente, teniendo en cuenta las características de su clienta vinculada a una financiera ilegal y con su marido preso en Bower por delitos penales económicos, las inconsistencias económicas de su cliente y el lugar en donde estaban los fondos depositados (cuenta offshore no declarada); habría perfeccionado las operaciones referidas sin haber corroborado la justificación y el origen de los fondos; habría emitido un reporte de operación sospechosa (R.O.S) para presuntamente encubrir su accionar delictivo, a pesar de haber contado con la justificación, "Certificación contable de origen de fondos" confeccionada por la contadora Castillo.

Destacó que aunque el operador bursátil, como agente de información ante la UIF, haya cumplido con su obligación administrativa de emitir el correspondiente R.O.S, de ninguna manera esa actividad administrativa y formal lo eximía de su responsabilidad penal.

Agregó, que es obligación legal del agente bursátil realizar todas las diligencias propias para conocer a su cliente y conocer el origen y justificación de los fondos con los que va a operar, situación que no se dio en el caso de autos.

Al respecto, sostuvo que la figura penal aplicada al presente caso no exige que quien lleva a cabo la acción tendiente a legitimar el activo tenga conocimiento preciso del delito previo, ni tampoco que se proponga a ocultar o disimular la procedencia ilícita de los bienes, sino que su conducta sea potencialmente apta para ello y que el autor lo sepa.

---

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

Entiende el Juez, que la conducta se configura con el conocimiento de la procedencia ilícita de los fondos, no requiriendo, por parte del sujeto activo del lavado, conocer con exactitud sobre el ilícito específico que los generó.

Puso de resalto que tanto Dina Noemí Castillo como Gonzalo Gómez Pizarro son profesionales técnicos formados y de experiencia en sus sectores con amplios conocimientos en cuestiones impositivas, cambiarias, bancarias y bursátiles, por lo que su participación y asesoría en el tema, junto con la del real propietario de los fondos en la cuestión, Martín Azar, habría sido fundamental a efectos de lograr con éxito los fines buscados a partir de tal operatoria.

Finalmente, atento a que el art. 518 del C.P.P.N dispone que al dictarse el auto de procesamiento, el juez debe ordenar el embargo de bienes de los imputados en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas, teniendo en cuenta el delito que se les endilga y las condiciones de vida manifestadas por los encartados, dispuso trabar el embargo por la suma de diez millones de pesos para el caso de los imputados Martín Azar y Agustina Cherro y de cinco millones de pesos con relación a los encausados Dina Noemí Castillo y Gonzalo Gómez Pizarro o, en su defecto, inhibirlos de su libre disposición por igual monto.

**II.- a)** En contra del procesamiento la Defensoría Pública Oficial, en representación del encartado **Martín Azar**, interpuso recurso de apelación (ver fs. 31). Expuso que el auto impugnado carece de fundamentación al realizar una errónea valoración de los hechos, de la prueba existente en autos violando los postulados de la sana





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

crítica racional y el principio de congruencia que deben servir de guía a toda resolución judicial.

Remarcó que en la operatoria endilgada a su defendido no se advierten los elementos configurativos de la figura penal en cuestión, por lo que su accionar resultaría atípico.

**b)** Por su parte, la defensa técnica de **Agustina Cherro de Miguel**, a cargo del doctor Tristán Gavier, se agravió de la resolución apelada y en tal sentido, arguyó la inexistencia de los hechos tal cual han sido fijados en la resolución impugnada.

Con respecto a la participación atribuida a su defendida en el hecho, sostuvo que el Instructor consideró infundadamente y de manera arbitraria, sin existir elementos de convicción suficientes para poder acreditar que su defendida participó en el lavado de activo respecto a los pagos efectuados ante la AFIP.

Expuso que el Instructor consideró que Agustina Cherro de Miguel es coautora del lavado de activos de origen ilícito sin tener en cuenta los elementos objetivos y subjetivos del tipo del delito.

Asimismo expresó que el Juez no aplicó correctamente la sana crítica racional (psicología, lógica y experiencia) por violación al principio de razón suficiente, tornando la resolución puesta en crisis infundada, incluso, omitiendo valorar prueba dirimente.

Por último, se agravió por la imposición del embargo infundadamente ya que entiende que impone una suma desproporcionada en comparación con el co-imputado Azar.

**c)** En el recurso de apelación presentado por la defensa técnica de **Dina Noemí Castillo**, ejercida por el doctor Benjamín Sonzini Astudillo, se alegó que la





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

resolución apelada ha contrariado el sistema de la sana crítica racional al valorar los elementos probatorios.

Sostuvo que no se está en condiciones de afirmar con la convicción necesaria la existencia de un estado intelectual que permita la acreditación de la imputación que pesa en contra de su asistida, ya que por el contrario, existe un estado apodíctico de certeza negativa sobre los hechos intimados haciéndose necesario el cierre definitivo del proceso.

Agregó que la decisión impugnada es radicalmente opuesta con los derechos y garantías normados por la Carta Magna y las leyes dictadas en consecuencia, más aún luego de la reforma constitucional operada en 1994 con la incorporación de tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional.

Manifestó que del plexo probatorio recolectado en autos no se advierte un estado intelectual mediante el cual se pueda acreditar en forma probable la participación responsable de la Contadora Dina Noemí Castillo en el hecho que se le reprocha y, por ende, no puede dictarse su procesamiento, mucho menos por la figura de lavado de activos.

Por último, alegó que en la certificación de fondos realizada por su asistida y que fuera cuestionada en el procesamiento, el profesional actuante no emite ningún juicio de valor técnico sobre el origen de los fondos y que su cliente le remite la información para efectuarlo.

d) Finalmente, los doctores Gerard Gramática Bosch y Débora Ruth Ferrari, en representación del encartado **Gonzalo Gómez Pizzaro**, interpusieron recurso de apelación.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

Expresaron que el hecho investigado y atribuido a su defendido no encuadra en una figura penal tanto en su faz objetiva como subjetiva, resultando atípico y que no se ha podido demostrar, con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, su participación criminal en el delito endilgado.

Agregaron que el Juez no evacuó las citas que su defendido realizó tanto en la declaración indagatoria como en su presentación personal.

Manifestaron que el Tribunal competente efectuó una valoración arbitraria, alejada de los preceptos ordenados por la sana crítica racional y de los principios de razón suficiente, tornándose la resolución infundada.

Por último, sostuvieron que el Instructor dispuso la traba de un embargo o en su defecto su inhibición por la suma de pesos cinco millones sobre los bienes de su defendido sin esgrimir fundamento alguno que justifique imponer esa cautelar ni, mucho menos, semejante cuantía.

**III.-** Radicados los autos ante esta Alzada, comparecieron en tiempo y forma las defensas de los imputados Agustina Cherro de Miguel, Martín Azar, Gonzalo Gómez Pizzaro y Dina Noemí Castillo, quienes presentaron por escrito los respectivos informes, en los términos del art. 454 del CPPN y del acuerdo N° 276/2008.

**a)** La defensa técnica de **Agustina Cherro de Miguel** atacó la resolución impugnada por entender que la misma carece de fundamentos y no respeta el principio de la sana crítica racional, dado que la decisión no se encontraría motivada y por ello devendría arbitraria.

Denunció que la resolución contiene fundamentos aparentes y por eso resulta arbitraria (art. 123 CPPN), ya que no cumple con los requisitos mínimos para lograr el





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

estándar requerido por el artículo 308 CPPN -respecto a los motivos en que se funda- por lo que solicitó el sobreseimiento en función del art. 336 inc. 4 del CPPN.

En dicho informe la defensa técnica de Agustina Cherro de Miguel adujo la falta de participación dolosa de su defendida en el delito enrostrado.

Sostuvo que la falta de conocimiento del origen de los fondos por parte de su cliente surge, no sólo de la descripción del requerimiento de instrucción, sino de la prueba global, ya que su defendida siempre actuó "por indicación de" sin conocer de dónde provenía el dinero, que de hecho no era de su propiedad.

Agregó que atento a que la causa conlleva otros hechos de lavado de activos de origen ilícito, el Juez ha utilizado extractos de los otros procesamientos, que no pueden ser usados en la resolución en ataque, ya que Agustina Cherro de Miguel no participaba de la financiera de su exmarido, como tampoco la Contadora Dina Castillo ni el Ing. Gómez Pizarro.

Resaltó que el sólo hecho de estar acusada como miembro de una asociación ilícita no puede ser considerado como prueba de la participación de su ahijada procesal en todos los hechos acusados, ya que se estaría violando los principios que rigen en torno a la participación.

Manifestó que Agustina Cherro de Miguel no conocía el origen de los fondos y que en ningún momento realizó algo ilícito que pueda darle viso de legalidad introduciendo dinero al circuito legal; sí pudo haber prestado su nombre a los fines de beneficiar la posición de Martín Azar en el proceso penal utilizando pagos al Fisco Nacional.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

Concluyó que no existen elementos de convicción suficiente que acrediten la participación de Agustina Cherro de Miguel en el hecho con el conocimiento del origen ilícito de los fondos.

Por último, sostuvo la ausencia de motivación respecto a la traba del embargo o en su defecto la inhibición y al monto del mismo.

Al respecto, manifestó que la traba de embargo debe ir acompañada de un mínimo de fundamentación y no imponer una sanción que no encuentra explicación y menos de porqué el juez llega a esa suma de dinero y la pone en pie de igualdad a Martín Azar.

Por ello, solicitó en primer lugar, que se revoque el auto atacado dictando el sobreseimiento por falta de participación en razón de ausencia del elemento subjetivo -dolo- en el hecho atribuido como coautora de lavado de dinero de origen delictivo (art. 303 inc. 1 CP). En segundo lugar, solicitó que se revoque el monto del embargo y se ordene al Instructor que disponga un monto proporcionado y con fundamento.

**b)** Por su parte, la defensa técnica de **Martín Azar** se agravió de la resolución apelada y en tal sentido, manifestó que la misma resulta arbitraria y por lo tanto debe ser revocada.

Entendió que la acción por la cual se imputa a su defendido Martín Azar no es punible, por entender que no se ha comprobado que el dinero de su asistido ingresado al país sea de origen espurio, sino que tal conclusión se basa en una suposición respecto a sus ingresos y actividades económicas declaradas, que no permitirían dar una explicación respecto al origen de los fondos.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

Agregó que por el principio de inocencia es menester comprobar la existencia de tales ilícitos previos para estimar que se ha concretado el delito de lavado de activos que se le endilga.

Manifestó que estamos ante un indicio denominado "anfibilógico" y que el mismo no es suficiente para generar el grado de probabilidad necesario para destruir la presunción de inocencia e in dubio pro reo.

Sostuvo que si se asume la postura opuesta, y se considera que el dinero que su defendido habría intentado "blanquear" provenía de hechos ilícitos, nos encontraríamos frente a lo que la doctrina denomina "autolavado", emparentado con el "autoencubrimiento", los cuales son considerados no punibles.

Concluyó que corresponde dictar el sobreseimiento de su asistido, dado que no se han comprobado los elementos requeridos para la configuración del tipo penal que se le imputa, ya sea porque se estime que no se ha acreditado que los fondos provengan de un ilícito penal o, subsidiariamente, porque incluso habiendo realizando tal asunción, nos encontraríamos ante un caso de autolavado que no es punible, ni afecta al orden económico protegido por la norma.

Hizo reserva del caso federal.

c) En el informe presentado por la defensa técnica de **Gonzalo Gómez Pizarro**, los doctores Gerard Gramática Bosch y Débora Ruth Ferrari, en primer lugar, solicitaron el sobreseimiento de su defendido por el hecho atribuido dado que no encuadra en una figura penal tanto en su faz objetiva como subjetiva, resultando atípica la conducta endilgada.







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

Al respecto, adujo la defensa que se advierte una argumentación dogmática y aparente para intentar justificar la atribución del hecho en contra de su pupilo procesal, omitiendo valoración de prueba relevante a favor de la hipótesis defensiva, deviniendo arbitraria.

Sostuvieron que la explicación incorporada por su defendido en relación a como se dio la operatoria que se investiga y la intervención de Argentina Valores S.A (AVSA) en la misma, da cuenta que Gonzalo Gómez Pizzaro no obró de manera ilícita, sino sólo cumplimentando con el rol que se esperaba como Agente de liquidación, compensación y negociación.

En segundo lugar, se agravio esta parte por el hecho que la resolución adolece de falta de fundamentación, toda vez que en la misma se prevé que sea informada la Comisión Nacional de Valores a Bolsa y Mercado Abierto Electrónico S.A, MAE S.A y a Mercado Argentina de Valores S.A, MAVSA, pero no se exponen los fundamentos que llevan a determinar porqué debe efectuarse la mencionada notificación limitándose así las posibilidades de argumentación en relación a dicho punto.

Remarcó que en dicha resolución no se evacuó las citas de su defendido en el marco de las manifestaciones vertidas con fecha 15.12.2020 y 23.11.2021, ya que no se receptaron declaraciones testimoniales a las señoras María Inés Mandakovic y Gabriela Marini, encargadas del Area de "Legajos y Compliance de AVSA".

Tampoco se tomó declaración testimonial a la Sra. Constanza Freyer, a cargo del Area de Tesorería, quien además estuvo en contacto con la señora Cherro de Miguel y fue quien se encargaba de receptar los diferentes comprobantes de las transferencias efectuadas.

*Fecha de firma: 02/12/2022*

*Alta en sistema: 05/12/2022*

*Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA*

*Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara*





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

Por otro lado, destacó que ni la Fiscalía ni el Juez requirieron mediante oficio al Banco BBVA información respecto a las comunicaciones mantenidas con Cherro de Miguel o AVSA, ni requirieron ningún tipo de información.

Remarcó que tampoco obran incorporados en autos la totalidad de los ROS, tal como fue requerido por la Fiscalía a cargo de la investigación y cuya respuesta fue el referido informe incorporado al expediente con fecha 13.6.2021, el cual no aporta de manera cabal los datos requeridos.

Por ello, concluyó la defensa que la participación de Gonzalo Gómez Pizarro en el hecho de lavado no resulta evidente dado que no existe prueba suficiente en la presente investigación.

Con respecto a la medida cautelar, se agravió en cuanto se dispuso la misma sin esgrimir fundamento alguno que justifique imponer esa cautelar ni, mucho menos, semejante cuantía.

Sostuvo que la resolución no permite conocer las razones de hecho y derecho que han determinado la decisión jurisdiccional ni la explicación lógica y probatoria de cómo se ha determinado el monto del embargo, en función de las pautas que fija el art. 123 CPPN.

Manifestó que es evidente que hay elementos probatorios suficientes para ordenar el sobreseimiento de su asistido. Subsidiariamente, si no se comparte dicha conclusión, consideró que existen elementos probatorios que no han sido adecuadamente valorados, es decir, ni la Fiscalía ni el Juez tuvieron presente la documental que se encuentra secuestrada en la sede del Juzgado, así como la documentación que resulta relevante y que no ha sido debidamente colectada.

*Fecha de firma: 02/12/2022*

*Alta en sistema: 05/12/2022*

*Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA*

*Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara*



#36079524#348202601#20221202141134116



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

En consecuencia, solicitó se dicte la falta de mérito y se prosiga con la investigación a los fines de recabar la prueba pertinente y útil en relación al hecho imputado.

**d)** El defensor técnico de **Dina Noemí Castillo**, doctor Benjamín Sonzini Astudillo, alegó una errónea argumentación en el decisorio atacado, dado que el Instructor, valiéndose de los dichos de los coimputados, le endilga a su asistida una responsabilidad profesional que no tuvo al momento de ejercer sus tareas como contadora en la certificación contable.

Manifestó que se vislumbran afirmaciones dogmáticas sin sustento probatorio alguno, lo que deriva en vicios en la argumentación del resolutorio atacado.

Expresó que los dichos de los coimputados no pueden ser adoptados como prueba de cargo porque esencialmente no lo son, ya que es el momento en que ejercen su defensa material y, por tanto, en forma interesada, pueden manifestar lo que mejor entiendan para ejercer su defensa material.

Observó que no se desprende de los elementos probatorios incorporados en el expediente que su asistida haya realizado asesoramiento técnico profesional para poder realizar las conductas investigadas de lavado de activos. Sostuvo que se ha realizado una interpretación arbitraria de los elementos documentales incorporados al expediente, en particular, la certificación contable realizada por su asistida.

Al respecto, recalcó que no cabe duda que la tarea realizada por Castillo fue efectuada bajo los lineamientos de la resolución técnica 37 y 575/20 de la Federación Argentina de Consejo Profesional de Ciencias





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

Económicas y que el Instructor no consideró el informe efectuado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, de donde surge en forma clara y contundente el alcance legal de la certificación de ingresos efectuada.

Agregó que en la certificación de fondos realizada por su asistida el profesional actuante no emite ningún juicio de valor técnico sobre el origen de los fondos, que es su cliente quien le remite la información para efectuarlo y así lo expuso en forma clara sin lugar a hesitación alguna y se ve reflejado en el documento técnico confeccionado por la profesional actuante. Por tanto, entiende que no se ha cometido acción u omisión alguna que pueda merecer reproche penal.

Manifestó que proseguir con esta investigación en contra de su defendida atentaría palmariamente al principio de inocencia en razón de que entiende que no se encuentra prueba de cargo capaz de demostrar la participación consciente y responsable de Castillo.

Finalizó diciendo que se ha demostrado que Dina Noemí Castillo no tuvo vinculación alguna con los eventos que se le imputa, motivo por el cual solicitó que se revoque el procesamiento dictado en su contra y se dicte sobreseimiento conforme lo previsto por el art. 336 inc. 4 del CPPN.

**IV.-** Resumidas en los precedentes párrafos las diferentes posturas, cabe ahora introducirse propiamente en el estudio de la causa, de conformidad al orden de votación que surge del sorteo de fs. 92 y certificado actuarial de fs. 93.

**La señora Juez de Cámara, doctora Graciela Montesi, dijo:**

Examinadas las constancias del expediente, en particular los criterios expuestos por el Juez Federal





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

interviniente en la resolución apelada y por los recurrentes en sus respectivos escritos de apelaciones e informes realizados ante esta Alzada, corresponde ingresar al tratamiento de las cuestiones suscitadas.

**I.-** En primer lugar, en relación al agravio esgrimido por las defensas técnicas de los imputados en cuanto alegan que el Juez Instructor ha brindado una valoración incorrecta en la resolución, la cual viola la sana crítica racional, resultando arbitraria y carente de motivación, debo señalar que considero que la resolución cuestionada reúne todos y cada uno de los requisitos formales y sustanciales que la califican como acto jurisdiccional válido, habiéndose brindado fundamentos en apoyo de lo decidido, ello sin perjuicio que la solución a la que se arribó les puedan causar un eventual agravio a las defensas.

Para formular un planteo como el que se pretende, que implicaría la arbitrariedad de la sentencia, no basta disentir con la valoración efectuada por el Tribunal actuante, sino que debe demostrarse acabadamente que el Juez se ha apartado de las reglas impuestas en el código de rito, incurriendo en ausencia de fundamentación suficiente o adoptando conclusiones que no resulten derivación razonada del derecho vigente.

En el caso concreto, aunque las partes recurrentes no compartan las conclusiones arribadas, se ha realizado un suficiente análisis de los extremos planteados y se han brindado los argumentos en base a los cuales el señor Juez adoptó su decisión, excluyendo así la tacha de arbitrariedad atribuida a la resolución judicial.

Así, de la lectura del auto recurrido surgen cuales fueron las razones que llevaron al Juez a decidir

*Fecha de firma: 02/12/2022*

*Alta en sistema: 05/12/2022*

*Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA*

*Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara*





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

como lo hizo, cumplimentando así con lo establecido por el art. 123 del Código Procesal Penal y con la razonabilidad inmanente del principio republicano de gobierno.

A su vez, la misma ha posibilitado a las partes conocer efectivamente las razones en que se basó el instructor para resolver, dándoles la posibilidad de interponer recurso para garantizar la tutela judicial efectiva.

De la misma forma, ha permitido a esta Cámara comprender los motivos que fundamentan el auto recurrido, posibilitando la revisión que corresponde como Tribunal de grado sobre la procedencia o improcedencia de lo decidido.

En definitiva, reitero que el cuestionamiento efectuado en este sentido por las partes respecto de la resolución apelada deriva de lo que entiendo constituye el disenso respecto de la decisión adoptada por el Juez de primera instancia, lo que será abarcado específicamente al tratar el fondo de la cuestión sometida a consideración.

### **II.- Situaciones Procesales**

Dejada a salvo la validez del auto bajo recurso, debo ahora introducirme en el análisis de las situaciones procesales de los imputados.

**1)** Previo a ello y en atención a la naturaleza de las decisiones cuestionadas, estimo oportuno efectuar algunas consideraciones acerca del estadio procesal por el que transita la presente causa, particularmente, sobre el alcance que, en el ordenamiento procesal vigente, corresponde asignarle al auto de procesamiento, tal como está previsto en artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

En orden a ello, ha de dejarse en claro que el procesamiento constituye una decisión jurisdiccional, de





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

carácter provisional -puede ser revocada o modificada durante el curso de la instrucción y cuando la aparición de nuevos elementos así lo justifiquen (artículo 311 del CPPN)-, mediante la cual el juez, sobre la base de la prueba colectada, valorada conforme las reglas de la sana crítica racional, arriba a la convicción, sin necesidad de que exista certeza plena, respecto de la comisión de un hecho delictuoso y de la culpabilidad del imputado como partícipe en aquél (arts. 45 y 46 del Código Penal).

Procede entonces en la medida en que exista *probabilidad*, es decir, cuando -teniendo en cuenta el fin inmediato del proceso penal, cual es la búsqueda de la verdad real- los elementos de cargo existentes generen convicción suficiente respecto de la existencia del hecho ilícito y la responsabilidad penal del imputado.

*"Se trata de la valoración de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad, aun no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir hacia la base del juicio. "...el procesamiento debe ser juicio provisional acerca de la posible culpabilidad o merecimiento de pena por parte del imputado, con respecto a un hecho penalmente relevante verificado en concreto, y apoyado en un conocimiento probable ante la existencia de elementos suficientes de convicción para dar paso a una acusación". (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, Tomo II, actualizado por Carlos Alberto Chiara Díaz, Ed. Rubinzal- Culzoni, pág. 500/507).*

Si, contrariamente y al momento de resolver la situación procesal del imputado, el juez hubiere adquirido *certeza negativa*, corresponderá ordenar el sobreseimiento cuando sea evidente que la pretensión represiva se ha







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

extinguido, o que carece de fundamento, cuando el hecho no fue cometido, o no lo fue por el imputado, o no encuadra en una figura penal, o media alguna causa de justificación, inculpabilidad, inimputabilidad o excusa absolutoria (artículo 336 del CPPN). Y si existiese *duda*, la que se verifica a partir del equilibrio existente entre los elementos que inducen a afirmar la existencia y participación del imputado en el hecho y aquellos que inducen a negarla, corresponderá dictar un auto de falta de mérito (artículo 309 del CPPN) (Cafferata Nores, "La Prueba en el Proceso Penal", Ed. Depalma, Bs. As. 1994).

2) Sobre dichos parámetros de valoración corresponde definir la responsabilidad de los encartados en orden al hecho que se les achaca.

Cabe efectuar aquí una breve caracterización del delito de lavado de activos de origen delictivo que se endilga a los imputados en los hechos primero al sexto. Dicha figura se encuentra tipificada en el artículo 303 del CP. que prescribe "...1) *Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil (\$ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí...*".

Natalia Luna Jabase, citando a Mecikovsky, señala que "una definición comúnmente aceptada por la doctrina





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

*indica que se llama lavado de dinero al conjunto de operaciones comerciales o financieras tendientes a legalizar los recursos, bienes y servicios provenientes de actividades ilícitas, o sea a transformar dinero obtenido en forma ilegal en valores patrimoniales para aparentar que proviene de ganancias legales o legítimas",* indicando -a modo de conclusión- que lavar activos consistiría en posibilitar la apariencia de licitud de bienes de procedencia ilícita (Natalia Luna Jabase, "Lecciones de Derecho Penal Parte Especial", Dr. Fabián I. Balcarse - Director-, Ed. IPSO, Córdoba, 2016, Tomo II, pág. 729).

Siguiendo la obra de cita, cabe señalar que se trata de un delito de los denominados pluri o multiofensivos al encontrarse en juego distintos bienes jurídicos, toda vez que si bien se procura la defensa del orden económico y financiero, de forma complementaria también se custodia tanto la administración de justicia, cuanto aquél bien jurídico contra el cual atenta el ilícito previo (Ob. Cit., pág. 730).

Estamos en presencia de un tipo mixto alternativo y que para que se constituya el tipo es preciso, a más de que se realice al menos una de las acciones descriptas, que la misma introduzca en circulación los bienes obtenidos ilícitamente, es decir, que los bienes mencionados deben intervenir en las transacciones de mercado. Se agrega que, para la configuración del tipo objetivo, es indispensable la existencia de la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito (Ob. Cit. pag. 733).

Cabe delimitar brevemente el alcance de la expresión ilícito penal a la que alude la norma y del cual deben provenir los bienes que son objeto de las distintas





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

conductas típicas. En torno al punto, se sostiene en la obra cita que *"...con anterioridad a la reforma introducida por la ley 26.683, el artículo que se ocupa del blanqueo de capitales, exigía que los bienes fuesen provenientes de un delito. Este cambio conceptual no es menor, toda vez que, mientras referirse a un delito implica reconocer una acción típicamente antijurídica y culpable, el ilícito penal se satisface con el injusto, prescindiendo por tanto del análisis de culpabilidad..."*.

Se hace referencia, finalmente, a otro requisito vinculado al límite cuantitativo previsto para la configuración de la figura básica, en tanto la propia norma contempla que el valor de los bienes supere la suma de pesos trescientos mil (\$ 300.000).

En cuanto al aspecto subjetivo del delito, cabe señalar que se trata de un delito doloso. Francisco J. Córdoba sostiene que dicho aspecto *"...se satisface con cualquier clase de dolo, esto es, dolo directo, dolo de consecuencias necesarias (o dolo de segundo grado) y dolo eventual..."* (Francisco J. Córdoba, "Delito de lavado de dinero", Ed. Hammurabi, Bs.As., 2016, pág. 35).

Sostiene Córdoba que en los antecedentes de la ley 25.246 puede leerse que el legislador fue muy cuidadoso en este punto y evitó *ex profeso* el uso de giros tales como "para" o "con el fin de" que pudieran ser mal interpretados en el sentido de que el delito sólo pudiese ser cometido con dolo directo, agregando que la ley 26.683 no produjo ninguna modificación en el tipo subjetivo de modo que rige aún la estructura que acaba de ser referida; a saber; hace falta, pero también basta, el conocimiento del origen ilícito de los bienes y de la posibilidad de que adquieran





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

apariencia de origen lícito como consecuencia de la realización de la acción típica.

De manera coincidente y a modo de conclusión, Natalia Luna Jabase señala que la figura básica admitiría el dolo eventual, siempre que la conducta desplegada por el sujeto activo no se vinculara con el verbo disimular, el que sólo es compatible con la intención del autor (Natalia Luna Jabase, "Lecciones de Derecho Penal Parte Especial", Dr. Fabián I. Balcarce -Director-, Ed. IPSO, Córdoba, 2016, Tomo II, pág. 737).

Sin perjuicio de arribar a dicha conclusión, expresa Jabase que existen partidarios de considerar que la figura presenta un elemento subjetivo del tipo, y por tanto admite sólo el dolo directo, entre ellos, Buompadre, Donna y Vidales Rodríguez. Citando al primero de dichos doctrinarios, señala que éste entiende que *"se trata de un tipo subjetivamente configurado que requiere no solo el conocimiento por parte del autor de que los bienes tienen un origen delictivo y la voluntad de realizar la conducta típica, sino que tales comportamientos deben estar guiados por una finalidad específica: que el dinero o los bienes adquieran una apariencia de legalidad"* (Ob. Cit. pág. 736).

Por otra parte, cabe señalar que se identifican distintas fases en el proceso de lavado o blanqueo de activos de origen delictivo, revelando un proceso secuencial en el que se desarrolla el delito.

En este entendimiento, se hace referencia a tres etapas, a saber, "la colocación o prelavado", "la estratificación o decantación" y "la integración, reciclaje o inversión" (ob. Cit. pág. 731/732).

En cuanto a la primera de dichas etapas, se indica que allí se inserta el dinero proveniente de





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

actividades ilícitas en una institución financiera legítima a través de diferentes clases de depósitos, procurando amalgamar los fondos ilegales con los provenientes de una actividad formal.

La fase de estratificación, comprende la realización de una serie de complejas transacciones financieras que pretenden alterar y dificultar el rastreo del verdadero origen de los fondos. Agrega que estas operaciones de ocultación pueden consistir en la utilización de distintos bancos para efectuar transferencias simples o entre cuentas de diferentes titulares radicadas en otros países.

Por último, en la fase de integración, reciclaje o inversión, los fondos son reintegrados al sistema financiero legal y reinvertidos en actividades lícitas para brindarles mayor credibilidad, cuya rentabilidad se convierte en un objetivo secundario. (Natalia Luna Jabase, "Lecciones de Derecho Penal Parte Especial", Dr. Fabián I. Balcarse -Director-, Ed. IPSO, Córdoba, 2016, Tomo II, pag. 731/732).

**3)** Definida así la base conceptual del tipo penal y previo a introducirme en el análisis de los motivos de agravio, debo destacar que el hecho aquí investigado, es decir la operación de lavado de activos de origen delictivo, tal como lo afirmó el Instructor, debía darse de manera distinta a las otras maniobras que ya se han resuelto en el marco de la causa principal, dado que en la presente causa, el jefe de la asociación se encontraba detenido, los fondos ilícitos se hallaban en una cuenta no declarada en el extranjero e iban a ser utilizados con el fin de "pagar impuestos", por lo que la maniobra requería de otra arquitectura y técnica.

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36079524#348202601#20221202141134116



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

Así, el hecho aquí investigado tal ha sido fijado en la Ampliación de Requerimiento de Instrucción de fecha 24/11/2021 obrante a fs. 4065/4075 de la siguiente manera: "Entre los días 1 de abril y 15 de julio de año 2020, **Martín AZAR y Agustina CHERRO DE MIGUEL**, habrían introducido al circuito legal económico de nuestro país, veintiséis millones trescientos mil pesos (\$26.300.000) a través de transferencias internacionales con el fin de dar apariencia de origen lícito a fondos que provendrían de ganancias obtenidas en virtud de las maniobras ilícitas objeto de investigación en autos - cuyo origen se corresponde con los acápites "B", "C" y "D" del hecho nominado primero y con el hecho nominado segundo del decisorio dictado por el Tribunal con fecha 14/10/2020, obrante a fs.2882/2944 y que fuera confirmado por la Alzada con fecha 31/05/2021-.

Dicha suma previamente habría sido depositada en moneda extranjera por un valor de trescientos mil dólares (U\$S 300.000) en una cuenta "offshore" ubicada en Estados Unidos a nombre de **Martín AZAR**, más precisamente en el Bank of América (fs. 3805).

Para llevar adelante la introducción de los \$26.300.000 los encausados **Azar y Cherro** habrían contado con la colaboración y el asesoramiento profesional de su contadora **Dina Noemí CASTILLO**, directora del estudio contable y jurídico "Castillo y asociados" y del Ing. **Gonzalo GÓMEZ PIZARRO**, presidente de la sociedad de bolsa "Argentina Valores S.A" (AVSA - AlyC integral - Registro CNV n°156), ambos con domicilio en Torre Capitalinas piso 4 y 16, respectivamente, quienes habrían organizado y diagramado la conversión, transferencia, acreditación y justificación del dinero ilícito.

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

Así, en primer lugar, con fecha 26 de marzo de 2020, para realizar la operatoria antes descripta, **Agustina CHERRO DE MIGUEL**, por indicación de la contadora **CASTILLO**, habría abierto la cuenta comitente N°310.083 en la sociedad de bolsa encabezada por **GÓMEZ PIZARRO**, declarando ante dicho agente tener condición fiscal de "monotributista" con ingresos anuales en ese entonces por un millón de pesos (\$1.000.000) y un patrimonio neto de trescientos mil dólares (U\$S 300.000), sin acompañar documentación alguna que justifique tales declaraciones.

Luego, el 1 de abril de 2020, **Martín AZAR**, quien ya se encontraba imputado y privado de su libertad en el Complejo Carcelario N° 1 de Córdoba en el marco de la presente causa por disposición de este Tribunal, habría transferido personalmente o a través de una persona de su confianza no identificada a esta altura de la instrucción, la suma de trescientos mil dólares (U\$S 300.000) desde una cuenta "offshore" de su titularidad en Bank of América radicada en EEUU y no declarada en nuestro país, más precisamente, a través de dos operaciones de ciento cincuenta mil dólares (U\$S 150.000), cada una, a una cuenta "offshore" del banco Wells Fargo (Cuenta N° 3370518783-RC) -también radicada en EEUU y no declarada en Argentina- a nombre de **Agustina CHERRO DE MIGUEL**, quien valiéndose de los aportes brindados por la contadora **Dina Noemí Castillo** y el agente de bolsa **Gonzalo GÓMEZ PIZARRO** habría llevado a cabo las operaciones financieras de "contado con liquidación" y "MEP", logrando de este modo que dicha suma ingrese al sistema bancario nacional.

Continuando con la operación, con fecha 3 y 8 de junio de 2020, **Agustina CHERRO DE MIGUEL**, contando con el asesoramiento de su contadora **Dina Noemí CASTILLO** y del







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

agente **Gonzalo GÓMEZ PIZARRO**, habría transferido desde su cuenta en Wells Fargo las sumas de doscientos diez mil dólares (U\$S 210.000) y cincuenta y cinco mil dólares (U\$S 55.000), respectivamente, a otra cuenta "offshore" a su nombre registrada en la entidad bancaria "TD Bank" con el N° 438/0421704.

Desde tal cuenta, la encartada **CHERRO DE MIGUEL** habría transferido con fecha 12 de junio de 2020 la suma de doscientos diez mil dólares (U\$S 210.000) a un bróker americano ("Interactive Broker") para que este compre acciones de la empresa "Apple Inc" en dólares, las que, luego habrían sido transferidas a la sociedad de bolsa presidida por **GÓMEZ PIZARRO -AVSA-**, la cual, a los efectos de perfeccionar la operación de "contado con liquidación", las habría convertido en acciones locales (Cedear Apple Inc), para luego venderlas en el mercado local y de este modo obtener las sumas en moneda nacional, que habrían sido depositadas a la cuenta comitente de **CHERRO DE MIGUEL** en la sociedad de bolsa AVSA.

A continuación, con fecha 22 de junio de 2020, **Agustina CHERRO DE MIGUEL** habría transferido desde la cuenta de la entidad "TD Bank" la suma de cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco dólares (U\$S 54.895) a la cuenta del Banco BBVA Francés de la sociedad de bolsa AVSA para que sean acreditados en su cuenta comitente y para que, luego, en el mercado local y mediante la operación conocida como "dólar MEP", el imputado **Gonzalo GÓMEZ PIZARRO** convierta esos dólares en pesos argentinos.

A dicha operación se suma que con fecha 22, 23 y 24 de junio de 2020, **Agustina CHERRO DE MIGUEL** habría realizado tres (3) transferencias desde su cuenta bancaria

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

en la entidad "Wells Fargo" por la suma de cinco mil dólares (U\$S5.000) cada una, a la mencionada cuenta en dólares del banco "BBVA Francés" perteneciente a "AVSA" para que sean acreditados en su cuenta comitente para efectuar otra operación de "dólar MEP".

Posteriormente, **Agustina CHERRO DE MIGUEL** habría transferido desde su cuenta comitente de la sociedad de bolsa AVSA a su cuenta bancaria en el banco "BBVA Francés" n° 2903354105, sucursal de Av. Rafael Núñez, la suma de veintiséis millones trescientos mil pesos (\$26.300.000), lo cual, se habría perfeccionado del siguiente modo: 1) Con fecha 19 de junio del 2020 se transfirieron dieciocho millones de pesos (\$18.000.000); 2) Con fecha 22 de junio del 2020 se transfirieron cuatro millones de pesos (\$4.000.000); y 3) Con fecha 15 de julio del 2020 se transfirieron cuatro millones trescientos mil pesos (\$4.300.000).

Finalmente, la suma en total mencionada ut supra habría sido depositada en favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en concepto de "Pago a cuenta, cuota, total plan" a fin de ser afectados a la cancelación de supuestas deudas tributarias del encartado **Martín AZAR**, en virtud de una solicitud de acogimiento a la moratoria vigente de conformidad al D.N.U n° 316/2020 y a la R.G. del organismo fiscal n° 4690/2020, de acuerdo a lo establecido por la Ley n° 27.541.

Se le atribuye participación necesaria en la apertura de la cuenta comitente en la sociedad de bolsa AVSA, transferencias y acreditaciones de dinero y todas las operaciones financieras antes descriptas a **Gonzalo Gómez Pizarro**, presidente de la sociedad de bolsa Argentina Valores S.A. -AVSA-, quien no habría verificado,

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36079524#348202601#20221202141134116



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

*ni requerido la correspondiente justificación de origen de fondos del dinero transferido y depositado en la cuenta de la imputada Cherro, conforme las exigencias fijadas en la resolución n° 21/2018 de la Unidad de Información Financiera (UIF).*

*A raíz de las maniobras financieras previamente descriptas, el Banco BBVA Francés, sucursal n° 290, ubicado en Av. Rafael Núñez de esta ciudad de Córdoba, le solicitó la justificación del origen de los fondos a la titular de la cuenta de dicho banco -previamente referida- **Agustina CHERRO DE MIGUEL**, quien junto con el co-imputado **Martín Azar** y para cumplimentar tal exigencia, habrían encomendado dicha tarea a la contadora **Dina Noemí Castillo**, quien en connivencia con los nombrados a los fines de ocultar el origen espurio del dinero y eludir los controles propios del sistema financiero y bancario argentino relativo a las maniobras de lavado de activos de origen delictivo, habría suscripto con fecha 25 de junio de 2020 una "Certificación contable sobre la declaración jurada de origen de fondos" falsa, toda vez, que no se habría basado en documentación de respaldo idónea sobre la licitud de esos fondos, instrumento que habría posibilitado que los encausados **Martín AZAR** y **Agustina CHERRO DE MIGUEL** perfeccionaran la maniobra ilegal y así pudieran introducir en el circuito formal los fondos de origen ilícito".*

**4)** Descripto así el hecho y refiriéndome ya específicamente a la situación procesal de los imputados Martín Azar, Agustina Cherro de Miguel, Gonzalo Gómez Pizarro y Diana Noemí Castillo, anticipo que comparto los fundamentos expuestos por el Juez de primera instancia en el auto bajo recurso, a los que me remito y doy aquí por

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

reproducidos (conf. art. 455 CPPN -a contrario sensu-). En efecto, la apreciación prudencial de las circunstancias expuestas en dicha resolución por el Instructor me conducen al rechazo de los agravios deducidos por las defensas y a la confirmación del auto de procesamiento apelado.

Los extremos que surgen de los elementos de convicción arrimados al proceso, particularmente la prueba expresamente reseñada por el Juez, como el contexto general de los presentes actuados, aspectos todos estos debidamente plasmados en el auto bajo recurso, permiten tener por acreditada no sólo la existencia del accionar ilícito enrostrado a los encartados, sino que son también suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en la instancia, la participación y responsabilidad penal de aquellos en el mismo.

Valoro que los argumentos defensivos expuestos sólo se presentan como intentos de colocar a los encartados en mejor posición frente al proceso y, a la luz de los demás elementos probatorios existentes, no logran desmerecer el mérito convictivo alcanzado que habilita a sostener la responsabilidad penal de los encartados por su participación dolosa en el accionar objeto de imputación.

En primer lugar, cabe destacar que del material probatorio reunido en las presentes actuaciones, las operaciones bancarias y bursátiles detalladas en el requerimiento de instrucción se encuentran constatadas en base a la documentación obtenida en BBVA Francés y en la sociedad de bolsa "Argentina Valores S.A", como así también surge del resumen de operatoria obrante a fs. 3802/3803.

Esto permitiría demostrar con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, las operaciones bancarias y bursátiles realizadas a nivel





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

nacional e internacional para ingresar al país el rédito ilícito depositado en una cuenta "offshore" ubicada en una entidad bancaria de EEUU (Bank of América) y sin declarar ante el Fisco Nacional, por parte de uno de los jefes de la asociación ilícita investigada en estas actuaciones, Martín Azar -que en ese momento se encontraba privado de su libertad- quien se habría valido de su esposa, Agustina Cherro de Miguel y la participación cómplice tanto de su Contadora, Dina Noemí Castillo, como del Presidente de la Sociedad de Bolsa "Argentina Valores S.A", el Ingeniero Gonzalo Gómez Pizarro.

Efectuadas dichas aclaraciones corresponde ahora analizar en particular la responsabilidad de cada uno de los imputados conforme la resolución apelada.

Avocada a ello, en lo que respecta al imputado **Martín Azar** y tal como lo expuso el Instructor en su resolución, cabe señalar que la suma involucrada en la maniobra ilegal habría sido depositada por el encartado para llevar adelante las operaciones investigadas con la intención de mejorar su situación procesal, denotando así a propiedad del dinero. A dicho objeto, Martín Azar se habría valido del accionar de terceras personas de confianza y otras idóneas en el tema, toda vez, que él se encontraba privado de su libertad e imputado por delitos contra orden económico y financiero, lo que era públicamente conocido y hacía imposible ingresar al país dinero de origen espurio de una forma legal, debido a los rigurosos controles propios de la actividad bancaria y bursátil.

Como bien lo ha indicado el Juez Federal interviniente, el dinero en cuestión derivaba de las operaciones ilegales llevadas adelante por la financiera ilegal de la que el imputado era jefe, toda vez, que a lo





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

largo de las actuaciones se ha probado que las cuentas en el exterior que poseían sus miembros habrían sido utilizadas para cometer ilícitos y principalmente para las maniobras de “*cable financiero*” que les habría redituado elevados montos dinerarios.

Cabe recordar que conforme fuera meritudo en la resolución dictada por este Tribunal con fecha 31.5.2021, los elementos de prueba colectados permitían concluir que el encartado Martín Azar junto a otros encartados habría puesto en marcha una presunta organización criminal de carácter permanente que habría tenido como finalidad realizar: 1- operaciones de intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina, en especial, otorgamiento de préstamos en efectivo con fondos de terceros sin autorización y descuento de cheques con fondo de terceros; 2- Transacciones de moneda nacional o extranjera al exterior, mediante transferencias consistentes en compensación o conciliación de cuentas posiblemente pro fuera del circuito legal; 3- Compra venta de moneda extranjera -en su mayoría dólar estadounidense- con fondos en efectivo por fuera del sistema legal y sin la previa autorización del Banco Central de la República Argentina.

Por ello, en la resolución anteriormente mencionada se dictó el procesamiento en contra del encartado por los delitos de Asociación Ilícita en calidad de jefe, Intermediación Financiera no autorizada y Lavado de activos de origen delictivo.

En efecto, los fondos que los encartados habrían intentado dar apariencia de origen lícito provendrían tanto de las operaciones de intermediación financiera no autorizada como de las otras maniobras delictivas que





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

redundaron en beneficios económicos, todo lo cual ha permitido, incluso, considerar que se habría conformado una gran asociación ilícita.

Cabe recordar que la situación fiscal de Martín Azar era la de "monotributista categoría F" al momento de la imputación, con un ingreso anual bruto de pesos un millón cuarenta y tres mil seiscientos noventa y seis con veintisiete.

A ello, debe sumarse como dato contradictorio que en un período aproximado de diez años el encartado realizó un total de 107 viajes al exterior conforme lo informado con fecha 5-10-2020 por la Dirección General de Recuperación de Bienes.

El costo elevado de estas salidas al exterior, sumado a su estilo de vida, no se condicen con los ingresos declarados ante la AFIP-DGI, los que a su vez se hallan en tela de juicio, por lo que está siendo investigado ya que podrían tratarse de ingresos y facturas simuladas.

Al respecto, cabe recordar tal como lo señaló el Representante del Ministerio Público Fiscal, que en ocasiones y a los fines de justificar ante los Bancos en el extranjero y demás organismos de control de los países en los que operaban, los imputados habrían confeccionado "facturas apócrifas", en las que se consignaban servicios o actividades por parte de sus empresas, que en realidad nunca se habían llevado a cabo, todo ello, a los fines de darle una apariencia de legalidad a la operación y de este modo engañar a los bancos extranjeros respecto a la licitud de los fondos y de los movimientos de dinero.

En cuanto a lo esgrimido por la defensa en relación a que el delito previsto por el art. 303 inc. 1 del C.P requiere para su configuración la existencia de un

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

delito previo, cabe destacar que uno de los ejes de la sustitución del texto legal dispuesto por la ley 26.683 fue la caracterización del origen de los bienes al supeditarlos como provenientes de un ilícito penal y no de un delito.

Así, en orden a la verificación del origen ilícito de los bienes objeto de las maniobras de lavado de activos, debe atenderse que el hecho antecedente puede ser un ilícito penal.

En esta línea, se ha expresado que el hecho que antecede de lavado de dinero sólo puede ser un delito. Pero no hace falta que el hecho anterior del cual provienen los bienes haya sido un hecho culpable y punible, sino que basta que haya sido típico y antijurídico, es decir un hecho ilícito (Córdoba, Fernando J. Ob. Cit. Pág. 137).

A lo dicho, cabe agregar que el ilícito penal precedente debe hallarse objetivamente vinculado con delitos susceptibles de generar ganancias atento el carácter esencialmente económico del lavado de activos. Al respecto, no puede dejar de valorarse que las actividades ilícitas que se investigan en el marco de la causa se vinculan con delitos del orden económico y financiero.

Así, la evaluación de las constancias que conforman el plexo fáctico y probatorio del hecho que aquí se analiza y la prudente apreciación de las circunstancias conforme la conceptualización e implicancias del tipo penal bajo estudio, me permiten rechazar los agravios deducidos por la defensa y son suficientes para tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en la instancia que se transita, la conducta atribuida y la responsabilidad penal del encartado de mención, debiendo confirmarse el procesamiento dictado a su respecto.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

En cuanto a la imputada **Agustina Cherro de Miguel** y los argumentos esgrimidos por su defensa en relación a su falta de participación, los mismos no logran desmerecer el mérito convictivo si se lo coteja con el plexo probatorio hasta ahora reunido y a su vez resultan similares a los ya merituados por la Suscripta en autos: "LEGAJO DE APELACIÓN EN AUTOS AZAR, MARTÍN Y OTROS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA" (EXPTE. N° FCB 70549/2018/45/CA28), en donde se sostuvo, a diferencia de lo manifestado por la defensa de la encartada, que el plexo probatorio demostraba un rol activo de la nombrada.

En la presente causa, nuevamente volvemos a ver a Agustina Cherro de Miguel con un rol activo, valiéndose de sus conocimientos en la materia para abrir cuentas tanto en el país como en el exterior (Argentina Valores S.A y TD Bank), llenando formularios y realizando personalmente las transferencias necesarias a los fines de efectuar la operatoria.

En cuanto al argumento esgrimido en torno a la falta de conocimiento por parte de la imputada del origen ilícito del dinero de su marido, considero que el mismo no puede tener acogida favorable.

Recordemos que en este tipo de delitos el dolo del autor no requiere el conocimiento a ciencia cierta del origen delictivo de los fondos, siendo suficiente su mera sospecha" (CNCP, Sala IV, "Álvarez", del 12.6.15, Reg. N° 1130/15; citado por Aboso, ob. Cit., pág. 1498).

Cabe destacar que al momento del presente hecho Martín Azar ya se encontraba privado de su libertad por la comisión de delitos contra el orden económico y financiero.

A más de ello, la intervención que ella habría tenido en las "operaciones de cable financiero" que se





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

habían efectuado en la financiera, llevan a presuponer el conocimiento de la ilicitud de los fondos.

Así, la evaluación de las constancias que conforman el plexo fáctico y probatorio del hecho que aquí se analiza y la prudente apreciación de las circunstancias comprobadas en autos a la luz de la sana crítica racional y conforme la conceptualización e implicancias del tipo penal, me permiten rechazar los argumentos vertidos por la defensa.

De esta manera, teniendo en cuenta las diversas hipótesis delictivas que se investigan en autos y que quienes fueron señalados como presuntos autores de las maniobras de lavado de activos- Martín Azar y Agustina Cherro de Miguel- además se encuentran sindicados y procesados como presuntos integrantes de una organización criminal que habría tenido por objeto la comisión de delitos contra el orden económico y financiero, me llevan a concluir la participación y responsabilidad penal de los encartados en el hecho investigado, debiendo en consecuencia confirmarse su procesamiento.

Corresponde ingresar ahora a la evaluación de la situación procesal de los encartados **Gonzalo Gómez Pizarro** y **Dina Noemí Castillo** en el presente hecho, ellos a diferencia de Martín Azar y Agustina Cherro están sindicados como partícipes necesarios del delito de lavado de activos.

Con respecto a la participación del encartado **Gonzalo Gómez Pizarro**, debo decir que si bien en el informe recursivo la defensa intenta deslindar su responsabilidad en el hecho atribuido, considero que tal como lo manifestó el Fiscal en el Requerimiento de Instrucción de fecha 24/11/2021, el aporte del mismo en el hecho habría





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

consistido en permitir la concreción de las operaciones sin verificar ni requerir la correspondiente justificación del origen del dinero transferido y depositado en la cuenta comitente que Agustina Cherro de Miguel abrió en Argentina Valores S.A, conforme lo establece la Resolución 21/2018 de la UIF.

Cabe destacar que Gonzalo Gómez Pizarro al momento del hecho, no sólo era Presidente de Argentina Valores S.A sino que además era el Oficial de Cumplimiento de las obligaciones de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo de esa persona jurídica ante la UIF.

Debido a la complejidad que encierra la investigación y persecución del fenómeno del lavado de activos en nuestro país, dentro del marco de los procesos penales como el de autos debe otorgarse máxima importancia al cumplimiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (PLA/FT) tanto al sector financiero, como bursátil.

Al respecto, cabe recordar que desde el año 2000 nuestro país es miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya misión es la de fijar los estándares internacionales para la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

En sus "40 Recomendaciones", se han instituido las políticas primarias para prevenir el lavado; buscando su implementación dentro de los territorios de los países miembros, en consonancia con la legislación local vigente para disminuir el peligro de lavado de dinero en sus sistemas financieros.

---

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

Es a través de la Ley 25.246, que nuestro país incorpora la figura de lavado de activos dentro del Código Penal como figura autónoma. En dicha oportunidad, también se crea la Unidad de Información Financiera (UIF) como entidad autárquica encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos y se designa a los sujetos obligados a informar a dicho Organismo la existencia de alguna actividad sospechosa que deba ser analizada.

Con posterioridad, se sancionó la Ley 26.683, que cristalizó la orientación del sistema antilavado hacia una política criminal en tres dimensiones. Una **preventiva**, mediante la implementación de las herramientas necesarias para la identificación de maniobras, sociedades, estructuras de negocios sospechosos, generando la información financiera necesaria, tanto a los fines de la persecución como de la prevención global de la criminalidad asociada a las finanzas. Otra **persecutoria**, destinada a mejorar e introducir nuevas herramientas de persecución penal de los casos sometidos a la justicia de criminal. Por último, la dimensión **punitiva** orientada a fortalecer el abanico de conductas punibles mediante la incorporación de nuevos delitos.

En dicha Ley 25.246, más precisamente en el Capítulo III se establece el **deber de informar** y los **sujetos que están obligados** a ello.

Así, el **artículo 20** establece: *"Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:*

**4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto**

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36079524#348202601#20221202141134116



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

**electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.**

**Artículo 20 bis:** "El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo.

El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa, impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta precedentemente.

La Unidad de Información Financiera (UIF) determinará el procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los obligados cumplirán ante ella el deber de informar que establece el artículo 20.

En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de administración, en los supuestos que lo establezca la reglamentación. Su función será formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

*artículo 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración.*

*En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma.*

*Para el caso de que el sujeto obligado se trate de un organismo público de los enumerados en los incisos 6 y 15 del artículo 20, deberá designarse un oficial de cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 corresponde exclusivamente al titular del organismo”.*

**ARTICULO 21:** *“Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones: a. Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva” (el resaltado me pertenece).*

**Artículo 21 bis:** *“A los fines del inciso a) del artículo 21, se toma como definición de cliente la adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). En consecuencia, se definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente,*







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

*una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados.*

**La información mínima a requerir a los clientes abarcará:**

**a) Personas Físicas:** nombres y apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; sexo; estado civil; número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original (documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica, cédula de identidad, pasaporte); CUIT/CUIL/CDI; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono y profesión, oficio, industria, comercio, etc. que constituya su actividad principal. Igual tratamiento se dará, en caso de existir, al apoderado, tutor, curador, representante o garante. **Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF)".**

A su vez, la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante el dictado de la **Resolución 21/2018** estableció la debida diligencia, la política de identificación y conocimiento del cliente por la que deben velar los sujetos obligados.

**ARTÍCULO 21.- Reglas generales de conocimiento del Cliente.**

**"El Sujeto Obligado deberá contar con políticas y procedimientos que le permitan adquirir conocimiento suficiente, oportuno y actualizado de todos los Clientes, verificar la información proporcionada por los mismos y**





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

*realizar un adecuado monitoreo de sus operaciones. En ese sentido, la ejecución de tales etapas de Debida Diligencia se llevará a cabo teniendo en cuenta los perfiles de riesgo asignados a cada cliente.*

***El Sujeto Obligado deberá identificar a sus Clientes en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas establecidas en el presente Capítulo. Las técnicas de identificación deberán ejecutarse al inicio de las relaciones comerciales, y deberán ser objeto de aplicación periódica, con la finalidad de mantener actualizados los datos, registros y/o copias de la base de Clientes del Sujeto Obligado.***

*La ausencia o imposibilidad de identificación en los términos del presente Capítulo deberá entenderse como impedimento para el inicio de las relaciones comerciales y, de ya existir éstas, para continuarlas. Asimismo, el Sujeto Obligado deberá realizar un análisis adicional para decidir si en base a sus políticas de gestión de Riesgos de LA/FT, deberán ser objeto de Reporte de Operación Sospechosa.*

*En todos los casos, sin perjuicio del nivel de Riesgo de LA/FT del Cliente, se realizará la verificación contra las listas de terroristas conforme lo dispuesto en la Resolución UIF N° 29/2013 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan. Asimismo, en todos los casos se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución UIF referida a PEP vigente en la materia.*

***Se deberá recabar, asimismo, información suficiente para establecer el propósito y objeto de la cuenta o relación comercial.***

*En el caso que los entes de un mismo Grupo desarrollen actividades que se encuentren alcanzadas por*





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

*distintas normas emanadas de la UIF, los mismos podrán celebrar acuerdos de reciprocidad que les permitan compartir legajos de Clientes, debiendo contar para ello con la autorización expresa de los Clientes para tales fines, de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 5° de la Ley N° 25.326 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan. Los mencionados acuerdos deberán asegurar el debido cumplimiento de requisitos de confidencialidad de la información y ser aprobados por el órgano de administración o máxima autoridad de cada ente. Cada ente deberá asegurar que los legajos de sus Clientes posean la documentación pertinente, según los requerimientos establecidos en la presente y que los mismos sean puestos a disposición de las autoridades competentes en los plazos requeridos.*

*Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, el Cliente se encuentra facultado para requerirle al Sujeto Obligado que comparta toda la información y documentación contenida en su legajo relativa a su identificación y el origen y licitud de los fondos, con otros sujetos obligados consignados en los incisos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 y 22 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan; cuando se encuentre destinada al inicio de una relación comercial o a la apertura de una cuenta”.*

### **Artículo 23.- Identificación de Clientes personas humanas.**

*“Cada Sujeto Obligado deberá contemplar cómo requisitos mínimos de identificación de sus Clientes personas humanas, los siguientes:*

---

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

a) *Nombre y apellido, tipo y número de documento que acredite identidad.*

*La identidad del Cliente deberá ser verificada utilizando documentos, datos o información confiable de fuentes independientes; con resguardo de la evidencia correspondiente de tal proceso y de la copia del documento que acredite la identidad acompañado por la persona humana. A tales fines se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad, el documento nacional de identidad emitido por autoridad competente nacional, y la Cédula de Identidad o el Pasaporte otorgados por autoridad competente de los respectivos países emisores.*

b) *Fecha y lugar de nacimiento.*

c) *Nacionalidad.*

d) *Estado Civil.*

e) *CUIL, CUIT, Clave de Identificación (CDI), o la clave de identificación que en el futuro sea creada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Este requisito será exigible a extranjeros, en caso de corresponder.*

f) *Domicilio real (calle, número, localidad, provincia, país y código postal).*

g) *Número de teléfono y dirección de correo electrónico.*

h) *Actividad laboral o profesional.*

i) *Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución UIF referida a PEP vigente en la materia.*

*Los requisitos previstos en el presente artículo resultarán de aplicación, en caso de existir, al apoderado, tutor, curador, representante, garante, y al autorizado, quienes deberán aportar, además de la información y documentación contemplada en el presente*





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

*artículo, el documento que acredite tal relación o vínculo jurídico.*

*Lo previsto en el presente artículo, es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26 sobre métodos no presenciales de identificación”.*

### **CAPITULO IV. MONITOREO TRANSACCIONAL, ANALISIS Y REPORTE.**

#### **Artículo 35.- Perfil Transaccional.**

*“La información y documentación solicitadas deberán permitir la confección de un perfil transaccional prospectivo (ex ante), sin perjuicio de las calibraciones y ajustes posteriores, de acuerdo con las operaciones efectivamente realizadas. Dicho perfil estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, la información transaccional y la documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria que hubiera proporcionado el Cliente o que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado, conforme los procesos de Debida Diligencia que corresponda aplicar en cada caso. (Párrafo sustituido por art. 2° de la Resolución N° 6/2022 de la Unidad de Información Financiera B.O. 14/01/2022. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)*

*En los casos de Clientes de Riesgo Medio y Alto, el perfil transaccional deberá estar respaldado por la documentación detallada en los artículos 27 y 28 de la presente, mientras que en el resto de los Clientes podrá estar basado en la información que hubiera sido suministrada por el Cliente o que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado, conservando las evidencias*





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

*correspondientes con arreglo al artículo 29 de la presente.*

*Dicho perfil será determinado en base al análisis de riesgo del Sujeto Obligado de modo tal que permita la detección oportuna de Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas realizadas por el Cliente.*

### **Artículo 37.- Reportes de Operaciones Sospechosas.**

*"Cada Sujeto Obligado deberá reportar las Operaciones Sospechosas a la UIF, conforme lo siguiente:*

*a) Los reportes incluirán todos los datos y documentos que permitan a la UIF utilizar y aprovechar apropiadamente dichas comunicaciones. Los reportes serán realizados en las condiciones técnicas establecidas en la Resolución UIF N° 51/2011 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan; cumplimentando todos los campos que sean requeridos y con entrega o puesta a disposición de la UIF de todas las tablas, documentos o informaciones de soporte que justifiquen la decisión de comunicación.*

*b) El reporte de Operaciones Sospechosas deberá ser fundado y contener una descripción de las razones por las cuales el Sujeto Obligado considera que la operación presenta tal carácter.*

*c) El plazo para emitir el reporte de una Operación Sospechosa de lavado de activos será de QUINCE (15) días corridos, computados a partir de la fecha en que el Sujeto Obligado concluya que la operación reviste tal carácter. Asimismo, la fecha de reporte no podrá superar los CIENTO CINCUENTA (150) días corridos contados desde la fecha de la Operación Sospechosa realizada o tentada.*

*d) El plazo para el reporte de una Operación Sospechosa de financiación del terrorismo será de CUARENTA Y OCHO (48)*





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

*horas, computados a partir de la fecha de la operación realizada o tentada.*

*Los Reportes de Operaciones Sospechosas son confidenciales por lo que no podrán ser exhibidos a los revisores externos independientes ni a los organismos de control de la actividad, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 21 inciso c) y 22 de la Ley N° 25.246 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan, excepto en los casos en que la CNV actúe en algún procedimiento de supervisión in situ, en el marco de la colaboración que ese Organismo de Contralor deberá prestar a esta UIF, en los términos del inciso 7 del artículo 14 de la Ley N° 25.246 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan. En tales circunstancias, tanto el Sujeto Obligado como la CNV deberán garantizar la confidencialidad de la información y su cadena de custodia.*

*Sin perjuicio de ello, los revisores externos independientes, podrán acceder a la información necesaria para evaluar el funcionamiento del sistema de monitoreo y alertas, y los procedimientos de análisis de Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas. La información proporcionada deberá omitir todo contenido que posibilite identificar a los sujetos involucrados en las operaciones”.*

*En síntesis, los sujetos obligados, en este caso, los Agentes y Sociedades de Bolsa, para realizar cualquier tipo de actividad deben conocer a su cliente recabando de ellos documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, como resulta ser la declaración jurada sobre origen y licitud de fondos.*

*Fecha de firma: 02/12/2022*

*Alta en sistema: 05/12/2022*

*Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA*

*Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara*







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

A su vez, deben contar con políticas y procedimiento que le permitan adquirir conocimiento suficiente, oportuno y actualizado de todos los clientes realizando un adecuado monitoreo de las operaciones.

Es en virtud de la normativa anteriormente citada, que debe evaluarse la responsabilidad de Gonzalo Gómez Pizarro, en su doble función de Presidente de Argentina Valores S.A y Oficial Cumplimiento de las obligaciones de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de esa persona jurídica ante la UIF.

Al respecto, considero que de la prueba obrante en autos, surge que el mismo **no cumplió con la obligación legal de realizar todas las diligencias propias conforme su función para conocer a su cliente y verificar el origen y justificación de los fondos con los que iba a operar.**

Recordemos que en virtud de la calidad de Oficial de Cumplimiento que recaía sobre el encartado, resultaba ser el responsable del cumplimiento de las obligaciones de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la persona jurídica que representa -Argentina Valores S.A- ante la UIF.

En virtud de ello, debió haber vedado por el cumplimiento por parte de Agustina Cherro de Miguel de los requisitos para la apertura de cuenta, porque lo cierto es que la misma no los cumplimentó.

De la página de Argentina Valores S.A (AVSA) vemos que para realizar la apertura de cuenta de una persona física debe disponerse de la siguiente documentación: *\*DNI, \*Impuesto, servicio o resumen de tarjeta a su nombre; \*CBU de las cuentas desde donde va a transferir fondos (deben coincidir con el titular de la*





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

*cuenta comitente); \*Comprobante de ingresos (cualquiera de las siguientes opciones es válida, no es necesario presentar todas): Certificación de ingresos personales y/o bienes efectuada por contador con intervención del Consejo de Ciencias Económicas; últimos 3 meses de facturación (certificada por Consejo de Ciencias Económicas); Recibos de haberes; Constancia de categoría de monotributo y 3 últimos pagos; boletos o escrituras de ventas de bienes; contratos de préstamos y acreditación bancaria, DDJJ varias con acuse de presentación (Bienes Personales, Ganancias, IVA).*

Sin embargo, del legajo de Agustina Cherro de Miguel que obraba en poder de Argentina Valores S.A, que fuera secuestrado con fecha 5.11.2020, y que se encuentra incorporado a fs. 3786/3831 en el cuerpo 17 del expediente principal, contiene: formulario rellenado *on line* por Agustina Cherro de Miguel, dos fotos de ella con DNI en mano, servicio de luz a nombre de Martín Azar, DNI de la encartada, constancia de opción en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, Libreta de Familia, origen de fondos (resumen de operatoria Agustina Cherro).

Si cotejamos los requisitos de la página con los cumplimentados por la encartada, se verifica que el CBU de las cuentas y los últimos 3 pagos de monotributo no fueron acompañados, no cumplimentado de esta manera con los mismos.

A mas de ello, de dicho legajo, surge que la cuenta en Argentina Valores S.A fue abierta en el mes de marzo, más precisamente el 26.3.2020, y que a partir de dicha fecha la misma empezó a operar. Ahora bien, la certificación contable efectuada por la coimputada Diana Noemí Castillo fue recién en el mes de junio, más

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

precisamente el día 26.6.2020, esto significa que todas las operaciones que efectuó Agustina Cherro de Miguel desde marzo hasta junio fueron realizadas sin haber cumplimentado con el origen de los mismos.

Si bien la defensa de Gómez Pizarro aduce en su informe que Agustina Cherro De Miguel habría cumplimentado con este requisito, lo cierto es que de su legajo personal surge recién con fecha 26.6.2020 una certificación contable de fondos (ver fs. 3830/3831).

Por ello, si bien el encartado sostiene que no hay tarea de control que no haya cumplimentado debidamente, que efectuó un comportamiento social y profesionalmente adecuado que excluye la posible tipicidad del hecho y que su conducta fue neutral e inocua acorde a su rol profesional, considero que ello se encuentra desvirtuado por la prueba obrante en autos.

Analizadas las constancias de autos y los elementos de convicción reunidos en el proceso, adhiero en líneas generales al análisis efectuado por el Juez de primera instancia, compartiendo su criterio, fundamentos y valoración, a los que me remito y doy aquí también por reproducidos (conf. art. 455 CPPN., texto según Ley 26.374 -a contrario sensu-)

En efecto, la apreciación prudencial de las circunstancias expuestas en el auto recurrido y valoradas nuevamente aquí permiten tener por acreditada no sólo la existencia del accionar ilícito enrostrado al encartado, sino que son también suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en la instancia, su responsabilidad penal, no logrando los argumentos defensivos desmerecer el mérito incriminante.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

A su vez, el argumento defensivo referido a la ajenidad de Gómez Pizarro en los hechos en virtud del principio empresarial de división de trabajo, no puede prosperar, dado que la delegación de facultades y funciones de los directores en cuadros medios y bajos de gestión y ejecución de las tareas empresariales no excluye la responsabilidad penal de los directivos que conservan las facultades de actuación, vigilancia y control.

Tal como lo sostuviera la Sala B de esta Cámara con fecha 1.6.2021 en autos: **"BUNGE ARGENTINA S.A. Y OTROS/ EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP-DGI"** (Expte. N° FCB 8749/2019/CA1): *"...el deber de supervisión en el ámbito de deberes especiales excluye la posibilidad de delegación total de la posición de garante y, por ende y en caso de verificarse la concurrencia de los elementos de las distintas categorías del delito, da lugar a la atribución del resultado y de la responsabilidad por la omisión penalmente relevante.*

*Ciertamente, desde el momento de aceptar un cargo en los cuadros directivos o en la administración, salvo engaño o violencia, situación que no se verifica en autos, el individuo sabe que está obligado legalmente a cumplir todas las obligaciones que pesan sobre la sociedad y que no hacerlo, le acarreará responsabilidad individual por los daños que cause con su acto u omisión (en este sentido, Carolina Robiglio, "La autoría en los delitos tributarios", 1ª ed. - Buenos Aires, Ad-Hoc, 2004, pág. 115)".*

*Que el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las obligaciones legales normativas a su cargo cobra especial relevancia en el esquema preventivo en materia de lavado de activos y financiación del*

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

*terrorismo, ya que los mismos pueden llegar a convertirse en intermediarios en el origen de los fondos y su posterior blanqueo.*

Finalmente, considero que los argumentos defensivos expuestos sólo se presentan como intentos de colocar al encartado en mejor posición frente al proceso y, a la luz de los demás elementos probatorios existentes, no logran desmerecer el mérito convictivo alcanzado por el Instructor que habilita a sostener la responsabilidad penal del encartado por su participación dolosa en el accionar objeto de imputación.

Examinada la responsabilidad de Gonzalo Gómez Pizarro corresponde ahora evaluar la participación de **Dina Noemí Castillo** en el hecho endilgado.

Al respecto, considero que el plexo probatorio obrante en autos demuestra, a diferencia de lo sostenido por la defensa de Castillo, que la participación de la misma no se circunscribe únicamente a un certificado contable ni que el instructor se haya valido únicamente de los dichos de los co-imputados para atribuirle responsabilidad.

Por el contrario, la prueba obrante en autos demuestra el asesoramiento contable que Castillo habría tenido hacia Martín Azar y Cherro de Miguel, lo que conlleva al conocimiento del caso y la situación del primero de los nombrados, quien se encontraba privado de su libertad por la supuesta comisión de delitos económicos y financieros.

Tal como lo indica el Instructor, el aporte de la imputada Castillo habría sido fundamental para lograr el éxito de la maniobra ilegal, en tanto ella habría contactado y conseguido la complicidad de Gómez Pizarro





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

como agente de bolsa allegado, el cual -como se dijo- presumiblemente concretó las operaciones sin efectuar los controles de rigor. Asimismo, la nombrada Castillo habría intervenido también directamente en la maniobra al certificar falsamente el origen de los fondos, tiempo después de que las operaciones bursátiles hubieran tenido lugar y ante requerimiento de entidad bancaria.

De las constancias de la causa, surge que la encartada Castillo desde el IP n° 190.123.120, habría accedido con la clave fiscal de Martín Azar al sitio web de AFIP-DGI (conforme el informe elaborado por la División de Investigaciones de dicho organismo fiscal obrante a fs. 4511/4623 y lo informado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación -Corte Suprema de Justicia de la Nación D.A.J.U.D.E.C.O), a lo que debe sumarse las presentaciones efectuadas ante el Fisco por parte de la Contadora para regularizar la situación patrimonial de Martín Azar que incluía declaraciones juradas desde el año 2014 en adelante como así tampoco el pago de \$26.300.000 a tales fines.

Así, vemos que del texto de una de las presentaciones efectuadas surge: *"De mi mayor consideración: Dina Noemí Castillo, DNI 16292490, en mi carácter de representante del Sr. Martín Azar, CUIT 20264814716, me dirijo a ustedes a fin de presentar y solicitar que se cargue el formulario 3283 que adjuntamos a la presente, mediante el cual se acredita apoderamiento otorgado por el Sr. Martín Azar". Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, saludo atentamente* (Fs. 4565 del expediente principal. El resaltado me pertenece).

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara

56



#36079524#348202601#20221202141134116



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

Todo ello permite sostener el conocimiento sobre la situación del imputado Azar y la presunta procedencia ilícita de los fondos objeto de las operaciones, habiendo efectuado igualmente aportes fundamentales para la concreción de la maniobra ilícita investigada.

Los extremos que surgen de los elementos de convicción arrimados al proceso, como el contexto general de los presentes actuados, aspectos todos estos debidamente plasmados en el auto bajo recurso, permiten tener por acreditada no sólo la existencia del accionar ilícito enrostrado a la encartada, sino que son también suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en la instancia, la participación y responsabilidad penal de aquella en el mismo, remitiéndome al análisis efectuado por el Juez de primera instancia que aquí doy por reproducido (conf. art. 455 CPPN. a contrario sensu).

Así las cosas, para concluir considero que los argumentos vertidos tanto por la defensa de Gonzalo Gómez Pizarro como por Noemí Dina Castillo no logran rebatir las probanzas acumuladas en autos, permitiendo tener por acreditado con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal la participación de los encartados en el hecho endilgado, por lo corresponde **confirmar el procesamiento** de los nombrados dispuesto en la resolución apelada.

Resulta atinado resaltar, tal como lo hizo el Juez de primera instancia, que tanto Dina Noemí Catillo como Gonzalo Gómez Pizarro son profesionales técnicos formados y de experiencia en sus sectores, con conocimiento en cuestiones impositivas, cambiarias, bancarias y bursátiles, por lo que su participación y asesoría no puede tildarse de inocente -más aún teniendo en cuenta la







## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

trascendencia que había logrado el caso que involucra a los encartados- y su aporte habría sido fundamental a efectos de llevar a cabo la operatoria ilícita investigada.

**III.-** Resueltas las situaciones procesales de los encartados y para concluir el tratamiento de los reproches efectuados al auto bajo recurso, cabe examinar los embargos preventivos dispuestos en los términos del artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación por el Juez Federal N° 2 de Córdoba en contra de los encartados Agustina Cherro de Miguel y Gonzalo Gómez Pizarro.

Al respecto, soy de opinión que tanto la medida como su monto deben ser confirmados por resultar la decisión ajustada a derecho y presentar una fundamentación apropiada. Tengo especialmente en cuenta que esta cautela tiene por finalidad garantizar de modo suficiente el pago de las costas del proceso, asegurando también las eventuales responsabilidades que puedan derivar del mismo.

A mi modo de ver, los embargos preventivos dispuestos por el Juez de la causa se ajustan a derecho y la fórmula resulta idónea para establecer prudencialmente la medida cautelar en cuestión en los términos del artículo 518 del CPPN., habida cuenta de la característica del hecho que se investiga en autos y la calidad de vida de los imputados.

En consecuencia, corresponde **confirmar los embargos** dispuestos por el Juez de Primera Instancia por la suma de pesos diez millones (\$10.000.000) en el caso de Agustina Cherro de Miguel y por la suma de cinco millones de pesos (\$5.000.000) en el caso de Gonzalo Gómez Pizarro o, en su defecto, inhibir a los encartados de la libre disposición de sus bienes por igual monto, respectivamente. Sin costas (arts. 530 y 531 CPPN.). Así voto.

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

### La señora Jueza de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo:

Adhiero a las consideraciones y conclusiones a las que arriba la señora Juez de Cámara Dra. Graciela Montesi y por ello me expido en idéntico sentido. Así voto.

### El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

Comparto la solución a la que arriba la señora Juez de Cámara del primer voto, por lo que me pronunció en los mismos términos. Así voto.

Por todo ello,

### SE RESUELVE:

**I.- CONFIRMAR** la resolución dictada con fecha 7 de diciembre de 2021 por el Juez Federal N° 2 de Córdoba en cuanto dispuso el procesamiento de **Martín Azar** (DNI 26.481.471), **Agustina Cherro de Miguel** (DNI 36.120.566), **Dina Noemí Castillo** (DNI 16.292.490) y **Gonzalo Gómez Pizarro** (DNI 22.371.126), por el delito de lavado de activos de origen delictivo en calidad de autores los dos primeros y de partícipes necesarios los dos últimos (art. 303 inc. 1 y 45 del CP), en virtud del art. 306 del CPPN.

**II.- CONFIRMAR** la resolución dictada con fecha 7 de diciembre de 2021 por el Juez Federal N° 2 de Córdoba en cuanto dispuso trabar embargo sobre los bienes de la imputada **Agustina Cherro de Miguel** (DNI 36.120.566) hasta cubrir la suma de pesos diez millones (\$10.000.000) y sobre los bienes del imputado **Gonzalo Gómez Pizarro** (DNI 22.371.126) hasta cubrir la suma de pesos cinco millones (\$5.000.000) o en su defecto inhibirlos de la libre disposición de sus bienes por igual monto, respectivamente (art. 518 y cc. del CPPN.).

**III.- Sin Costas** (arts. 530 y 531 del CPPN.).

Fecha de firma: 02/12/2022

Alta en sistema: 05/12/2022

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#36079524#348202601#20221202141134116



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 70549/2018/53/CA30

**IV.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado,  
publíquese y bajen.-**

GRACIELA MONTESI  
JUEZ DE CÁMARA

LILIANA NAVARRO  
JUEZA DE CÁMARA

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES  
JUEZ DE CÁMARA

CELINA LAJE ANAYA  
SECRETARIA DE CÁMARA

